



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

VI LEGISLATURA

Serie B:
PROPOSICIONES DE LEY

30 de julio de 1998

Núm. 218-1

INFORME DE LA PONENCIA

122/000191 **Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas graves.** (Procedente de las Proposiciones de Ley con núms. de expte. 122/000070 y 122/000097).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES del informe conjunto emitido por las Ponencias sobre la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas conexas (núm. expte. 122/70) («BOCG», serie B, núm. 89-2, de 23 de diciembre de 1997) y sobre la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica el artículo 263 bis y se crea un nuevo artículo 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (núm. expte. 122/97) («BOCG», serie B, núm. 116-2, de 23 de diciembre de 1997).

El nuevo texto resultante de la unificación de las Proposiciones de Ley citadas se denominará «Proposición de Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas graves» (núm. expte. 122/191), tal como figura en el Anexo al Informe de la Ponencia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 1998.—El Presidente del Congreso de los Diputados, **Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde**.

A la Comisión de Justicia e Interior

Las Ponencias encargadas de redactar el Informe sobre la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de per-

feccionamiento de la acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas conexas (expte. núm. 122/70) y la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica el artículo 263 bis y se crea un nuevo artículo 282 bis en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (122/97) integradas por los Diputados doña M.^a Luisa Cava de Llano i Carrió, doña María Fernanda Faraldo Botana y don Ignacio Gil Lázaro (GP); don Joaquín Javier Gago López y don Javier Barrero López (GS); don Pablo Castellano Cardalliaquet (GIU); don Manuel Silva i Sánchez (GC-CiU); doña Margarita Uría Echevarría (GV-PNV); don Luis Mardones Sevilla (GCC) y doña Cristina Almeida Castro (GMx), ha estudiado con todo detenimiento dichas iniciativas, así como las enmiendas presentadas, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento elevan a la Comisión el siguiente:

INFORME

I. Consideraciones previas relativas al procedimiento.

1. Los miembros de las dos Ponencias, reunidas conjuntamente, consideran conveniente la refundición en un solo texto de las distintas iniciativas legislativas que tienen por objeto la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 263 bis y la creación de un nuevo artículo 282 bis. Dichas iniciativas son la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas conexas (122/70) y la

Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica el artículo 263 bis y se crea un nuevo artículo 282 bis en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (122/97), ambas tomadas en consideración el 16 de diciembre de 1997.

2. Las Ponencias han examinado conjuntamente las dos iniciativas legislativas y las enmiendas presentadas a todas ellas, a resultas de lo cual formulan a la Comisión una propuesta que contiene un único texto refundido de ambas, que a partir de este momento será objeto de tramitación agrupada.

En el apartado II de este Informe se reflejan los acuerdos alcanzados por las Ponencias en relación con los diferentes artículos y enmiendas. En el Anexo figura el texto resultante, con el fin de facilitar su debate y votación por la Comisión de Justicia e Interior.

II. Acuerdos relativos al contenido de la Proposición de Ley.

a) Título de la Proposición.

Se propone a la Comisión la incorporación de la enmienda 12 del G.P. Popular de modificación del título de la Proposición de Ley Orgánica presentada por el G.P. Popular, de tal forma que el título de la nueva Proposición de Ley será el siguiente:

«Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas graves.»

b) Modificaciones en el artículo 263 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. (Artículo 1 de ambas Proposiciones de Ley Orgánicas.)

Las Ponencias acuerdan tomar como base para la redacción de este nuevo artículo, el artículo 1 de la Proposición de Ley Orgánica 122/70.

Apartado 1.º

Se propone una redacción transaccional entre las enmiendas 1 de G.P. IU, 9 del G.P. Socialista, 13 y 14 del G.P. Popular, de tal forma que el apartado 1.º de la presente Proposición de Ley Orgánica quedará redactado de la siguiente forma:

«1. El Juez de Instrucción competente y el Ministerio Fiscal, así como los Jefes de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial de ámbito provincial y sus mandos superiores, podrán autorizar la circulación o entrega vigilada de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así como de otras sustancias prohibidas. Esta medida deberá acordarse por resolución fundada, en la que se determine explícitamente, en cuanto sea posible, el objeto de autorización o entrega vigilada, así como el tipo y cantidad de la sustancia de que se trate. Para adoptar estas medidas, se tendrá en cuenta su necesidad a los fines de investigación en relación con la importancia del delito y con las posibilidades de vigilancia. El Juez que dicte la resolución dará traslado de copia de la misma al

Juzgado Decano de su jurisdicción, el cual tendrá custodiado un registro de dichas resoluciones.

También podrá ser autorizada la circulación o entrega vigilada de los equipos materiales y sustancias a los que se refiere el artículo 371 del Código Penal, así como los bienes y ganancias a que se hace referencia en el artículo 301 del Código Penal, en todos los supuestos previstos en el mismo.»

Apartado 2.º

Se propone añadir a la redacción inicial las enmiendas 15 y 16 del G.P. Popular, quedando la redacción de la siguiente forma:

«Se entenderá por circulación o entrega vigilada la técnica consistente en permitir que remesas ilícitas o sospechosas de drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas u otras sustancias prohibidas, los equipos materiales y sustancias a que se refiere el apartado anterior, las sustancias por las que se haya sustituido las anteriormente mencionadas, así como los bienes y ganancias procedentes de las actividades delictivas tipificadas en los artículos 301 a 304 y 368 a 373 del Código Penal, circulen por territorio español o salgan o entren en él sin interferencia obstativa de la autoridad o sus agentes y bajo su vigilancia, con el fin de descubrir o identificar a las personas involucradas en la comisión de algún delito relativo a dichas drogas, sustancias, equipos, materiales, bienes y ganancias, así como también prestar auxilio a autoridades extranjeras en esos mismos fines.»

Apartado 3.º

Se propone la incorporación de la enmienda 17, del G.P. Popular, de manera tal que este apartado quedaría redactado como sigue:

«El recurso a la entrega vigilada se hará caso por caso y, en el plano internacional, se adecuará a lo dispuesto en los tratados internacionales.

Los funcionarios de la Policía Judicial darán cuenta inmediata al Ministerio Fiscal sobre las autorizaciones que hubiesen otorgado de conformidad con el apartado 1.º de este artículo y, si existiese procedimiento judicial abierto, al Juez de Instrucción competente.»

c) Redacción de un nuevo artículo 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. (Artículo 2 de ambas Proposiciones de Ley Orgánica.)

Las Ponencias proponen a la Comisión la redacción de un nuevo artículo sobre la base de la Proposición de Ley Orgánica 122/97, quedando el artículo 2 de la nueva Proposición de Ley Orgánica de la manera que sigue:

Apartado 1.º

Se propone incorporar la enmienda 14 del G.P. Popular y la 18 del G.P. Catalán (CiU), redactándose una transaccional con el texto de la Proposición de Ley Orgánica

de tal manera que dicho apartado queda redactado de la siguiente forma:

«A los fines previstos en el artículo anterior y cuando se trate de investigaciones que afecten a actividades propias de la delincuencia organizada, el Juez de Instrucción competente o el Ministerio Fiscal, dando cuenta inmediata al Juez, podrán autorizar a funcionarios de la Policía Judicial mediante resolución fundada y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la investigación, a actuar bajo identidad supuesta, que será otorgada por el Ministerio del Interior por el plazo de seis meses prorrogables por períodos de igual duración, quedando legítimamente habilitados para actuar en todo lo relacionado con la investigación concreta, bajo tal identidad.

La resolución por la que se acuerde deberá consignar el nombre verdadero del agente y la identidad supuesta con la que actuará en el caso concreto. La resolución será reservada y deberá conservarse fuera de las actuaciones con la debida seguridad.

La información que vaya obteniendo el agente encubierto deberá ser puesta a la mayor brevedad posible en conocimiento de quien autorizó la investigación.»

Apartado 2.º

El apartado se mantiene en su redacción actual si bien el G.P. CiU mantiene su enmienda núm. 19 a dicho apartado.

Apartado 3.º

Se propone la incorporación de la enmienda 17 del G.P. Popular que afecta al segundo párrafo de este apartado 3.º de tal manera que el primer párrafo no sufre modificaciones con respecto a la redacción recogida en la Proposición de Ley Orgánica 122/97, quedando el párrafo segundo de este apartado 3.º redactado de la forma siguiente:

«La información obtenida por el agente encubierto deberá aportarse al proceso en su integridad, debiendo ser valorada en conciencia por el órgano judicial competente.»

Apartado 4.º

Se propone incorporar la enmienda núm. 8, del G.P. Vasco, a excepción del último inciso de dicha enmienda, de tal forma que el apartado 4.º queda redactado como sigue:

«Cuando las actuaciones de investigación puedan afectar a los derechos fundamentales, el agente encubierto deberá solicitar del órgano judicial competente las autorizaciones que, al respecto, establezca la Constitución y la Ley, así como cumplir las demás previsiones legales aplicables.»

Apartado 5.º

Se propone aceptar parcialmente la enmienda núm. 3, del Grupo Federal de IU, de tal manera que se añaden

dos nuevas letras a dicho apartado, letras h) e i) con la siguiente redacción:

«... h) La extorsión prevista en el artículo 243 del Código Penal.

i) Delitos contra la propiedad y el Patrimonio Histórico.»

Apartado 6.º

Se propone una transacción entre el texto de la Proposición y las enmiendas 9, del G.P. Vasco, y 20, del G.P. Catalán, quedando el apartado redactado de la siguiente forma:

«El agente encubierto estará exento de responsabilidad criminal por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una provocación al delito.

Para poder proceder penalmente contra el mismo por las actuaciones realizadas a los fines de la investigación, el Juez competente para conocer la causa deberá, tan pronto tenga conocimiento de la actuación de algún agente encubierto en la misma, requerir informe relativo a tal circunstancia de quien hubiere autorizado la identidad supuesta, en atención al cual resolverá lo que a su criterio proceda.»

d) Disposiciones Derogatorias y Finales.

No se han presentado enmiendas a la Disposición Derogatoria ni a la Disposición Final por lo que su redacción queda tal y como aparece recogida en la Proposición de Ley Orgánica del G.P. Popular (122/70).

e) Modificaciones a la Exposición de Motivos.

Se propone una nueva redacción a la Exposición de Motivos en concordancia con las modificaciones introducidas con la siguiente redacción:

«La criminalidad organizada ha adquirido en nuestro tiempo una alarmante dimensión, tanto por su importancia, como por el modus operandi con que actúa.

Ante este nuevo reto, los sucesivos Gobiernos han ido poniendo instrumentos de todo orden en manos de quienes tienen la misión de perseguir y reprimir dichas conductas, si bien existen todavía algunos de los que puede dotarse legítimamente un Estado en su lucha contra esas formas de criminalidad que no han tenido acogida en nuestro sistema jurídico.

Asimismo, la persecución de los fenómenos relacionados con la delincuencia organizada y su vinculación al tráfico ilegal de drogas, común motivo de preocupación para todas las naciones, ha sido en los últimos años materia de urgente atención y absoluta prioridad, como viene a demostrar la elaboración de distintos instrumentos jurídicos internacionales. En esta línea, destaca la aproba-

ción en el marco de las Naciones Unidas de la Convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, hecha en Viena el 20 de diciembre de 1988, en donde se insta a las Partes firmantes de la misma, entre ellas España, a adoptar las medidas necesarias, incluidas las de orden legislativo y administrativo, que, de conformidad con las disposiciones fundamentales de sus respectivos ordenamientos jurídicos internos, sean necesarias para hacer frente con la mayor eficacia a los diversos aspectos de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas que tengan una proyección internacional.

Las reformas que se incorporan en la presente Ley parten de la insuficiencia de las técnicas de investigación tradicionales en la lucha contra este tipo de criminalidad organizada, que generalmente actúa en ámbitos transnacionales y con abundancia de medios conducentes a la perpetración de los delitos. De esta forma, se introducen en el ordenamiento jurídico medidas legales especiales que permitan a los miembros de la Policía Judicial participar del entramado organizativo, detectar la comisión de delitos e informar sobre sus actividades, con el fin de obtener pruebas inculpatorias y proceder a la detención de sus autores. Todas estas modificaciones deben introducirse respetando el fin del proceso penal que no es otro que el descubrimiento de la verdad real y la aplicación de la ley penal al caso concreto, teniendo siempre en cuenta que los límites de las técnicas propuestas de investigación se encuentran en el sistema de derechos y garantías que la Constitución reconoce a todo imputado, ya que por más abyectas que sean las formas de delincuencia que se tratan de combatir, ello no justifica la utilización de medios investigadores que puedan violentar garantías constitucionales. Por tanto, la búsqueda de medios jurídicos eficaces para luchar contra la criminalidad organizada, no debe comportar un detrimento de la plena vigencia de los principios, derechos y garantías constitucionales y la preservación de los aludidos principios, derechos y garantías exige, siempre que exista conflicto, que el mismo se resuelva en favor de estos últimos, porque ellos constituyen el verdadero fundamento de nuestro sistema democrático.

Por todo ello, en el presente texto se completa en primer lugar la regulación de la “entrega vigilada” contenida en el artículo 263 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, incluido en ésta por la Ley Orgánica 8/1992, de 23 de diciembre, de Modificación del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que hasta este momento estaba referida exclusivamente al delito de tráfico de drogas, para extenderla también a las investigaciones relacionadas con los delitos de blanqueo de bienes y de comercio ilícito de precursores. La extensión que ahora se opera está en concordancia con la obligación impuesta a los Estados Parte en el artículo 11 de la citada Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Por otra parte, se añade a la Ley de Enjuiciamiento Criminal un nuevo artículo 282 bis), que proporciona habilitación legal a la figura del “agente encubierto” en el marco de las investigaciones relacionadas con la denominada “delincuencia organizada”. De esta forma, se

posibilita el otorgamiento y la utilización de una identidad supuesta a funcionarios de la Policía Judicial, que puede mantenerse en el eventual proceso judicial posterior, con lo que se completa el régimen de protección que preveía la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, respecto a peritos y testigos de causas criminales. Asimismo, se delimita a estos efectos el concepto de “delincuencia organizada”, determinando las figuras delictivas que comprende. Finalmente, se faculta al agente encubierto para utilizar, bajo estricto control judicial y fiscal, medios complementarios de investigación.»

Por último, los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista, Federal Izquierda Unida, Catalán (CiU) y Vasco (PNV) retiran todas sus enmiendas a excepción de la enmienda núm. 19 del G.P. Catalán (CiU), así como se mantienen todas las enmiendas del G.P. Mixto.

A efectos de facilitar su debate en Comisión, en el Anexo a este Informe figuran las enmiendas y correcciones técnicas que las Ponencias proponen incorporar a esta Proposición de Ley Orgánica.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 1998.—**M.^a Luisa Cava de Llano i Carrió, María Fernanda Faraldo Botana, Ignacio Gil Lázaro, Joaquín Javier Gago López, Javier Barrero López, Pablo Castellano Cardalliaguet, Manuel Silva i Sánchez, Margarita Uría Echevarría, Luis Mardones Sevilla, Cristina Almeida Castro.**

ANEXO

PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL EN MATERIA DE PERFECCIONAMIENTO DE LA ACCIÓN INVESTIGADORA RELACIONADA CON EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y OTRAS ACTIVIDADES ILÍCITAS GRAVES

Exposición de Motivos

La criminalidad organizada ha adquirido en nuestro tiempo una alarmante dimensión, tanto por su importancia, como por el modus operandi con que actúa.

Ante este nuevo reto, los sucesivos Gobiernos han ido poniendo instrumentos de todo orden en manos de quienes tienen la misión de perseguir y reprimir dichas conductas, si bien existen todavía algunos de los que puede dotarse legítimamente un Estado en su lucha contra esas formas de criminalidad que no han tenido acogida en nuestro sistema jurídico.

Asimismo, la persecución de los fenómenos relacionados con la delincuencia organizada y su vinculación al tráfico ilegal de drogas, común motivo de preocupación para todas las naciones, ha sido en los últimos años materia de urgente atención y absoluta prioridad, como viene

a demostrar la elaboración de distintos instrumentos jurídicos internacionales. En esta línea, destaca la aprobación en el marco de las Naciones Unidas de la Convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, hecha en Viena el 20 de diciembre de 1988, en donde se insta a las Partes firmantes de la misma, entre ellas España, a adoptar las medidas necesarias, incluidas las de orden legislativo y administrativo, que, de conformidad con las disposiciones fundamentales de sus respectivos ordenamientos jurídicos internos, sean necesarias para hacer frente con la mayor eficacia a los diversos aspectos de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas que tengan una proyección internacional.

Las reformas que se incorporan en la presente Ley parten de la insuficiencia de las técnicas de investigación tradicionales en la lucha contra este tipo de criminalidad organizada, que generalmente actúa en ámbitos transnacionales y con abundancia de medios conducentes a la perpetración de los delitos. De esta forma, se introducen en el ordenamiento jurídico medidas legales especiales que permitan a los miembros de la Policía Judicial participar del entramado organizativo, detectar la comisión de delitos e informar sobre sus actividades, con el fin de obtener pruebas inculpatorias y proceder a la detención de sus autores. Todas estas modificaciones deben introducirse respetando el fin del proceso penal que no es otro que el descubrimiento de la verdad real y la aplicación de la ley penal al caso concreto, teniendo siempre en cuenta que los límites de las técnicas propuestas de investigación se encuentran en el sistema de derechos y garantías que la Constitución reconoce a todo imputado, ya que por más abyectas que sean las formas de delincuencia que se tratan de combatir, ello no justifica la utilización de medios investigadores que puedan violentar garantías constitucionales. Por tanto, la búsqueda de medios jurídicos eficaces para luchar contra la criminalidad organizada, no debe comportar un detrimento de la plena vigencia de los principios, derechos y garantías constitucionales y la preservación de los aludidos principios, derechos y garantías exige, siempre que exista conflicto, que el mismo se resuelva en favor de estos últimos, porque ellos constituyen el verdadero fundamento de nuestro sistema democrático.

Por todo ello, en el presente texto se completa en primer lugar la regulación de la «entrega vigilada» contenida en el artículo 263 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, incluido en ésta por la Ley Orgánica 8/1992, de 23 de diciembre, de Modificación del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que hasta este momento estaba referida exclusivamente al delito de tráfico de drogas, para extenderla también a las investigaciones relacionadas con los delitos de blanqueo de bienes y de comercio ilícito de precursores. La extensión que ahora se opera está en concordancia con la obligación impuesta a los Estados Parte en el artículo 11 de la citada Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Por otra parte, se añade a la Ley de Enjuiciamiento Criminal un nuevo artículo 282 bis, que proporciona habilitación legal a la figura del «agente encubierto» en

el marco de las investigaciones relacionadas con la denominada «delincuencia organizada». De esta forma, se posibilita el otorgamiento y la utilización de una identidad supuesta a funcionarios de la Policía Judicial, que puede mantenerse en el eventual proceso judicial posterior, con lo que se completa el régimen de protección que preveía la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, respecto a peritos y testigos de causas criminales. Asimismo, se delimita a estos efectos el concepto de «delincuencia organizada», determinando las figuras delictivas que comprende. Finalmente, se faculta al agente encubierto para utilizar, bajo estricto control judicial y fiscal, medios complementarios de investigación.

Artículo 1.

Se modifica, en el Título I del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el artículo 263 bis, que tendrá la siguiente redacción:

1. El Juez de Instrucción competente y el Ministerio Fiscal, así como los Jefes de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial de ámbito provincial y sus mandos superiores, podrán autorizar la circulación o entrega vigilada de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así como de otras sustancias prohibidas. Esta medida deberá acordarse por resolución fundada, en la que se determine explícitamente, en cuanto sea posible, el objeto de autorización o entrega vigilada, así como el tipo y cantidad de la sustancia de que se trate. Para adoptar estas medidas se tendrá en cuenta su necesidad a los fines de investigación en relación con la importancia del delito y con las posibilidades de vigilancia. El Juez que dicte la resolución dará traslado de copia de la misma al Juzgado Decano de su jurisdicción, el cual tendrá custodiado un registro de dichas resoluciones.

También podrá ser autorizada la circulación o entrega vigilada de los equipos materiales y sustancias a los que se refiere el artículo 371 del Código Penal, así como los bienes y ganancias a que se hace referencia en el artículo 301 del Código Penal, en todos los supuestos previstos en el mismo.

2. Se entenderá por circulación o entrega vigilada la técnica consistente en permitir que remesas ilícitas o sospechosas de drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas u otras sustancias prohibidas, los equipos materiales y sustancias a que se refiere el apartado anterior, las sustancias por las que se haya sustituido las anteriormente mencionadas, así como los bienes y ganancias procedentes de las actividades delictivas tipificadas en los artículos 301 a 304 y 368 a 373 del Código Penal, circulen por territorio español o salgan o entren en él sin interferencia obstativa de la autoridad o sus agentes y bajo su vigilancia, con el fin de descubrir o identificar a las personas involucradas en la comisión de algún delito relativo a dichas drogas, sustancias, equipos, materiales, bienes y ganancias, así como también prestar auxilio a autoridades extranjeras en esos mismos fines.

3. El recurso a la entrega vigilada se hará caso por caso y, en el plano internacional, se adecuará a lo dispuesto en los tratados internacionales.

Los funcionarios de la Policía Judicial darán cuenta inmediata al Ministerio Fiscal sobre las autorizaciones que hubiesen otorgado de conformidad con el apartado 1 de este artículo y, si existiese procedimiento judicial abierto, al Juez de Instrucción competente.

Artículo 2.

Se añade en el Título III del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal un artículo 282 bis con la siguiente redacción:

1. A los fines previstos en el artículo anterior y cuando se trate de investigaciones que afecten a actividades propias de la delincuencia organizada, el Juez de Instrucción competente o el Ministerio Fiscal, dando cuenta inmediata al Juez, podrán autorizar a funcionarios de la Policía Judicial mediante resolución fundada y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la investigación, a actuar bajo identidad supuesta, que será otorgada por el Ministerio del Interior por el plazo de seis meses prorrogables por periodos de igual duración, quedando legítimamente habilitados para actuar en todo lo relacionado con la investigación concreta, bajo tal identidad.

La resolución por la que se acuerde deberá consignar el nombre verdadero del agente y la identidad supuesta con la que actuará en el caso concreto. La resolución será reservada y deberá conservarse fuera de las actuaciones con la debida seguridad.

La información que vaya obteniendo el agente encubierto deberá ser puesta a la mayor brevedad posible en conocimiento de quien autorizó la investigación.

2. Ningún funcionario de la Policía Judicial podrá ser obligado a actuar como agente encubierto.

3. Los funcionarios de la Policía Judicial que hubieran actuado en una investigación con identidad falsa de conformidad a lo previsto en el apartado 1, podrán mantener dicha identidad cuando testifiquen en el proceso que pudiera derivarse de los hechos en que hubieran intervenido y siempre que así se acuerde mediante resolución judicial motivada, siéndole también de aplicación lo previsto en la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre.

La información obtenida por el agente encubierto deberá aportarse al proceso en su integridad, debiendo ser valorada en conciencia por el órgano judicial competente.

4. Cuando las actuaciones de investigación puedan afectar a los derechos fundamentales, el agente encubierto deberá solicitar del órgano judicial competente las autorizaciones que, al respecto, establezca la Constitución y la Ley, así como cumplir las demás previsiones legales aplicables.

5. A los efectos señalados en el apartado 1 de este artículo se considerará como delincuencia organizada la

asociación de tres o más personas para realizar de forma permanente o reiterada conductas que tengan como fin cometer alguno o algunos de los delitos siguientes:

a) Delitos contra la salud pública previstos en los artículos 368 a 373 del Código Penal.

b) Delitos de terrorismo previstos en los artículos 571 a 578 del Código Penal.

c) Tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos previstos en los artículos 566 a 568 del Código Penal.

d) Falsificación de moneda previsto en el artículo 386 del Código Penal.

e) El blanqueo de bienes de procedencia ilícita previstos en el artículo 301 del Código Penal.

f) Secuestro de personas previstos en los artículos 164 a 166 del Código Penal.

g) Delitos relativos a la prostitución previstos en los artículos 187 a 189 del Código Penal.

h) La extorsión prevista en el artículo 243 del Código Penal.

i) Delitos contra la propiedad y el Patrimonio Histórico.

6. El agente encubierto estará exento de responsabilidad criminal por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una provocación al delito.

Para poder proceder penalmente contra el mismo por las actuaciones realizadas a los fines de la investigación, el Juez competente para conocer la causa deberá, tan pronto tenga conocimiento de la actuación de algún agente encubierto en la misma, requerir informe relativo a tal circunstancia de quien hubiere autorizado la identidad supuesta, en atención al cual resolverá lo que a su criterio proceda.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

DISPOSICIÓN FINAL

Única. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Edita: **Congreso de los Diputados**. C/. Floridablanca, s/n. 28071 Madrid
Teléf.: 91 390 60 00. Fax: 91 429 87 07. <http://www.congreso.es>

Imprime y distribuye: **Imprenta Nacional**. B.O.E.
Avda. Manoteras, 54. 28050 Madrid. Teléf.: 91 384 15 00. Fax: 91 384 18 24

Depósito legal: M. 12.580 - 1961